



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)

MEDIO DE CONTROL:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE:	Blanca Cecilia del Carmen Valero Sánchez
DEMANDADO:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
RADICACIÓN:	15001 3333 004 2018 00131 00

1. ASUNTO POR RESOLVER

El presente proceso fue repartido a este Despacho, luego de que el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de esta ciudad, no avocara el conocimiento de las diligencias y ordenara su remisión a los Juzgados Administrativos del Circuito de Tunja (Reparto). En consecuencia, se estudiara si el caso que nos ocupa es competencia de este Estrado Judicial.

2. ANTECEDENTES

1. El expediente de la referencia fue radicado el 12 de abril de 2018, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, el cual a través de auto de 19 de abril de 2018, considero no ser el competente y lo envió al Juzgado de Pequeñas Causas Laborales de Tunja (fl. 25)
2. Recibido por el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Tunja, este manifestó carecer de competencia, por cuanto, la demandante no es una trabajadora oficial y dispuso la remisión del expediente a los juzgados administrativos de esta ciudad. (fls. 27-28)
3. Repartido el expediente correspondió su conocimiento a este Despacho (fl. 30).

3. CONSIDERACIONES

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa conocerá de asuntos a que refiere el artículo 104 del CPACA, que señala:

***Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.** La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(...)

4. *Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (Subrayado fuera del texto)*

Esta norma determina los asuntos laborales de resorte de esta jurisdicción, que en materia de seguridad social refieren exclusivamente a los relacionados con servidores públicos siempre que su régimen sea administrado por personas de derecho público.

A su vez el numeral 4 del artículo 105 de la misma disposición normativa, establece que **no** corresponden al conocimiento de esta jurisdicción, **“Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales”**

Por su parte, la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, conocerá de los asuntos contemplados en Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, que en el numeral 2 de su artículo 2 señala:

“Artículo 2. Competencia General.

(...)

2. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.

(...)”

En lo referente a la forma de vinculación y la calidad de las madres comunitarias, el Decreto 289 de 2014 en sus artículos 2º y 3º dispone:

“ARTÍCULO 2º. MODALIDAD DE VINCULACIÓN. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.

ARTÍCULO 3º. CALIDAD DE LAS MADRES COMUNITARIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF.”

Así las cosas, al establecerse que las madres comunitarias no tienen la calidad de servidora pública, este proceso no es de conocimiento de esta jurisdicción, correspondiéndole su conocimiento a la jurisdicción ordinaria laboral, de conformidad a lo señalado en el numeral 1º del artículo 2 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social.

Sobre el particular, el Consejo Superior de la Judicatura a través de providencia del 27 de septiembre de 2017 Magistrada Ponente Dra. Julia Emma Garzón de Gómez al momento de resolver un conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Promiscuo de Corozal Sucre y el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo, en una demanda dirigida en contra del ICBF, mediante la cual se pretendía el reconocimiento de salarios, prestaciones y la declaración de existencia de una relación laboral, dirimió el conflicto, asignando el conocimiento al Juzgado Primero Promiscuo de Corozal Sucre, bajo los siguientes argumentos:

*“Así pues, encuentra la Sala en aras de dirimir la controversia planteada, se procederá a atender la pretensión principal de la demanda, pues ésta se dirige al pronunciamiento por vía judicial sobre que se le reconozcan salarios y prestaciones a la señora **KETTY***

ENITH MALDONADO JIMÉNEZ, además de que se declare la existencia de un contrato de trabajo o relación laboral por haberse desempeñado como madre comunitaria, voluntaria.

Tampoco por el hecho de estar adscrito al ICBF al cual prestó sus servicios la demandante, adquiere la condición de servidora pública, como lo consideró el Juzgado Laboral proponente del conflicto.

Sobre el tema, pertinente se hace recordar lo dicho por el Consejo de Estado en Sala de Consulta y Servicio Civil el 2 de diciembre de 1996:

“...Las personas que colaboran en los Hogares Infantiles mediante contrato laboral, esta relación se establece con las asociaciones o entidades no gubernamentales o con los propios hogares infantiles cuando éstos estén dotados de personería jurídica; en tales casos se trata de trabajadores particulares que no tienen carácter de servidores públicos; en consecuencia no son empleados públicos ni trabajadores oficiales”.

Con todo lo afirmado, al ser el objeto de la litis una controversia relacionada con el Sistema de Seguridad Social Integral, la jurisdicción para conocer el asunto, radica en la Jurisdicción Ordinaria, tal como lo dispone el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, sentido en el que se dirimirá el presente conflicto.

Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 del 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las Madres Comunitarias por parte del Presidente de la República, quien les garantizó un contrato laboral...

Por lo anterior, la Sala encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad de demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto.

En consecuencia, como la señora Blanca Cecilia del Carmen Valero Sánchez en su condición de madre comunitaria no ostenta la calidad de servidor público, este Estrado Judicial se abstendrá de avocar conocimiento por carecer de jurisdicción y propondrá **conflicto negativo de competencias** para conocer del presente asunto, conforme lo estipula el artículo 139 del C.G.P.:

“Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso...” (Subrayado del Despacho).

Ahora bien, como el presente conflicto negativo de competencias se propone entre juzgados de diferentes jurisdicción, esto es, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Tunja y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Tunja, de acuerdo a lo dispuesto en el citado artículo, el superior en común es el Consejo Superior de la Judicatura y por tanto es el competente para dirimir el conflicto.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja.

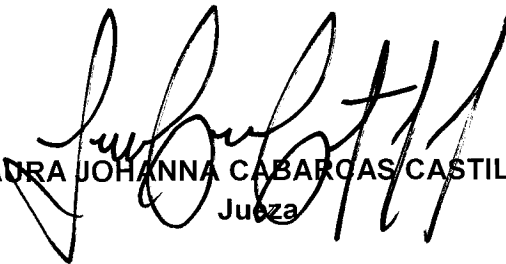
RESUELVE:

PRIMERO: Declarar que este Juzgado **CARECE DE JURISDICCIÓN** para adelantar el presente proceso, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: **PROPONER EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA** para el conocimiento del presente asunto, de acuerdo a lo indicado en la motivación.

TERCERO: Por secretaria, **REMÍTASE** el expediente por intermedio del Centro de Servicios para los Juzgados Administrativos al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, para que resuelva el conflicto negativo de competencia mencionado, dejando las anotaciones a que haya lugar.

Notifíquese y cúmplase.


LADRA JOHANNA CABARCAS CASTILLO
Jueza

¹ps.

<p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA</p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO</p> <p>N° <u>39</u> De Hoy <u>27 de julio de 2018</u> A LAS 8:00 a.m.</p> <p>FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO</p>

¹ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 27 de julio de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario